



Consejo de Seguridad

Distr. general
28 de octubre de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 25 de octubre de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Permítame referirme a mi carta de fecha 6 de agosto de 2002 (S/2002/905).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe complementario que se adjunta, presentado por el Senegal de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que tuviese a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Jeremy **Greenstock**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido
en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa al terrorismo



Anexo

Carta de fecha 18 de octubre de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Representante Permanente del Senegal ante las Naciones Unidas

En relación con su carta S/AC.40/2002/MS/OC.123, de fecha 15 de julio de 2002, me complace transmitirle el informe complementario del Senegal, conforme a lo solicitado por el Comité contra el Terrorismo, tras el examen del primer informe presentado con arreglo al párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Papa Louis **Fall**
Embajador

[Original: francés]

Documento adjunto**Informe complementario del Senegal sobre la aplicación de las disposiciones de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la lucha contra el terrorismo**

Como complemento de su informe inicial, el Gobierno del Senegal presenta seguidamente en las aclaraciones solicitadas por el Comité contra el Terrorismo respecto de diversos aspectos vinculados con la aplicación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Párrafo 1**Apartado a): Aclaraciones sobre los aspectos generales del proyecto de Ley armonizada de lucha contra el blanqueo de capitales en el plano subregional del África occidental (UEMOA-CEDEAO).**

El proyecto de Ley armonizada de lucha contra el blanqueo de capitales aplicable a la totalidad de los Estados del África occidental forma parte de las medidas jurídicas adoptadas o por adoptar por el África para contribuir a reprimir eficazmente el blanqueo de capitales y, al propio tiempo, los circuitos de financiación del terrorismo.

El proyecto de Ley armonizada tiene debidamente en cuenta los textos y disposiciones en vigor o en curso de elaboración en los planos internacional y en la subregión del África occidental.

En el plano internacional. Se tienen en cuenta las siguientes medidas:

- La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 19 de diciembre de 1988;
- El establecimiento en 1989, con ocasión de la Cumbre del Grupo de los Siete en París, del Grupo de Trabajo sobre Medidas Financieras (FATF), que elaboró 40 recomendaciones que se consideran como documento de antecedentes en el plano internacional;
- El número de esas recomendaciones ha aumentado ahora a 48 desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, a fin incorporar el tema de la lucha contra la financiación del terrorismo;
- La aprobación por el Consejo de Europa de la Convención relativa al blanqueo de capitales, la detección, el decomiso y la confiscación del producto del delito, de 8 de noviembre de 1990, así como de las directivas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, de 10 de junio de 1991;
- El Plan de acción mundial aprobado en virtud de la resolución S-20/4 del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, de 10 de junio de 1998, sobre el problema mundial de las drogas;
- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo, el 15 de diciembre de 2000.

Los instrumentos citados *supra* constituyen el marco de referencia en que se sustentan las instituciones financieras internacionales, incluidas las del África occidental, a fin de evaluar la acción de los Estados en la represión del blanqueo de capitales, que gira en torno de los siguientes ejes principales:

- 1) La cooperación legislativa mediante una armonización conceptual, con la mira de proveer una asistencia judicial mutua eficaz en el plano internacional;
- 2) La colaboración entre los poderes públicos, las autoridades monetarias, el mundo financiero y las profesiones que realizan actividades particularmente vulnerables al blanqueo de dinero;
- 3) La intensificación de la cooperación entre los Estados en el marco de convenciones bilaterales o multilaterales.

En el plano subregional. Las medidas adoptadas en el ámbito de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) culminaron en la creación del **Grupo Intergubernamental de Acción contra el Blanqueo de Dinero en el África Occidental (GIABA)**, que ha de propiciar la cooperación en materia legislativa y coordinar las actividades de los Estados en esa esfera. El Senegal ha desempeñado un papel importante en la constitución del GIABA, pues fue el primer país de la subregión que tipificó el blanqueo de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes en su Código de Estupefacientes.

El establecimiento del GIABA tiende, entre otras cosas, a favorecer la cooperación necesaria de los Estados miembros de la CEDEAO que tienen sistemas jurídicos diferentes, con la mira de racionalizar la lucha contra el blanqueo de capitales en el plano subregional.

Por esta razón, el Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO) se ha propuesto dotar a los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA) (Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y el Senegal) de un marco legislativo apropiado para la lucha contra el blanqueo de capitales de origen criminal o delictivo, que provienen de diversas modalidades de tráfico, entre las cuales cabe mencionar la corrupción, el fraude y la malversación de rentas públicas, etc.

Esta legislación comunitaria se justifica por la aparición contemporánea de una nueva modalidad de delincuencia financiera, que plantea un indudable riesgo para la integridad del sistema financiero y monetario de la subregión.

Después de su examen en dos seminarios técnicos organizados en Dakar, en julio de 2000 y febrero de 2002, el proyecto de Ley armonizada se presentó en junio de 2002 al Consejo de Administración del BCEAO, que lo aprobó.

El proyecto se presentó al Consejo de Ministros de la UEMOA, en septiembre de 2002, para su aprobación. Una vez aprobado, se transmitirá a los Estados miembros para que lo incorporen en su ordenamiento jurídico nacional.

Paralelamente a ese procedimiento, el GIABA, en una primera etapa y en consonancia con la misión que se le ha confiado, hizo traducir el proyecto de Ley al inglés y lo puso en conocimiento de los Estados de habla inglesa de la CEDEAO y también de los demás Estados de habla inglesa y portuguesa que no son miembros de la UEMOA. De esta manera, estos Estados podrán tomar conocimiento del proyecto, su objetivo y orientaciones.

En una segunda etapa, el GIABA recabó la asistencia jurídica del Gobierno del Reino Unido, que ha aceptado encargarse de la adaptación del proyecto de Ley armonizada al sistema del *common law*, con objeto de facilitar su incorporación al ordenamiento jurídico de los Estados de habla inglesa de la CEDEAO. Se trata de que todos los Estados puedan adoptar medidas concretas para lograr una armonización subregional de su legislación en la esfera de la lucha contra el blanqueo de capitales en el curso de este año.

Por último, cabe señalar la elaboración y aprobación de un reglamento comunitario destinado a organizar y reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo. Este instrumento, que se aplicará principalmente al sistema bancario, ya ha entrado en vigor para los Estados miembros de la UEMOA.

El GIABA ha adoptado los mismos procedimientos respecto de este documento, con la mira de lograr la armonización en el plano de los Estados miembros de la CEDEAO.

En cuanto a los aspectos principales del proyecto de Ley armonizada, conviene subrayar que abarca en seis títulos todos los aspectos de la lucha contra el blanqueo de capitales, a saber:

- El Título Preliminar se ocupa de la definición del blanqueo de capitales, sustentada, de manera integral, en los instrumentos jurídicos internacionales mencionados *supra*. En el Título Preliminar se definen también los términos empleados;
- El Título I define el objeto de la ley, a saber, establecer el marco jurídico de la lucha contra el blanqueo de capitales y definir los sujetos sometidos a dicho régimen, esto es, los Estados mismos, el tesoro público, el Banco Central y los demás agentes (personas físicas o jurídicas) que manejan fondos públicos o privados;
- El Título II legisla sobre la prevención del blanqueo en lo que se refiere a las modalidades de identificación y conocimiento de la clientela, las condiciones de conservación de los comprobantes de las operaciones y la institución de programas nacionales de prevención del blanqueo de capitales;
- El Título III se ocupa de la detección del blanqueo, en particular de los procedimientos de la declaración de sospecha, la responsabilidad del Estado en virtud de la declaración, el levantamiento del secreto bancario y, por último, el establecimiento de un centro nacional de análisis de informaciones financieras (CENTIF), de composición pluridisciplinaria, que en cada Estado ha de realizar las investigaciones pertinentes;
- El Título IV, “Medidas coercitivas”, establece las medidas de incriminación, decomiso, sanción penal y confiscación del producto del blanqueo de dinero;
- El Título V se refiere a la cooperación internacional en materia de asistencia judicial mutua e intercambio de informaciones entre los Estados partes y con otros Estados miembros de la CEDEAO y la comunidad internacional;
- El Título VI contiene las disposiciones finales, en particular la fecha de aprobación por los Estados partes, el seguimiento de la ejecución, las enmiendas y la entrada en vigor uniforme para todos los Estados miembros de la UEMOA.

El Senegal, en su calidad de miembro de la UEMOA, aguarda a que concluya el proceso de aprobación comunitaria para presentar el texto a su Parlamento, con la mira de incorporarlo a su ordenamiento jurídico nacional antes del plazo fijado por el Tratado Constitutivo de la Unión Monetaria.

Apartado b)

- Una vez que concluya en el Senegal el procedimiento de ratificación del **Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo** se adoptarán las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para incorporarlo en el ordenamiento jurídico nacional y darle efecto.

- **Principales disposiciones del artículo 80 del Código Penal**

Seguidamente se reproduce el artículo 80 del Código Penal:

“Las demás maniobras y actos que puedan alterar la seguridad pública o causar dificultades políticas graves e infringir las leyes del país se castigarán con pena de prisión de tres a cinco años y una multa de 100.000 a 1.500.000 francos CFA.

También se podrá imponer a los responsables la prohibición de residencia.”

Nota: El texto derogado castigaba también “las demás maniobras y actos que puedan redundar en descrédito de las instituciones públicas o su funcionamiento”.

Esta disposición, que se consideraba incompatible con las libertades democráticas, fue derogada por ley el 29 de enero de 1999.

En realidad, el legislador quiso también, en 1999, eliminar del orden jurídico senegalés el delito de opinión.

Apartado c)

- **¿Con qué criterios se elabora la lista de cuentas abiertas a las que se aplica el artículo 42 de la Ley No. 90-06?**

Independientemente de esos criterios, ¿establece esta ley una disposición que prevea la congelación de las cuentas en las cuales se hayan realizado transacciones sospechosas?

Conviene, en primer lugar, señalar que el artículo 42 de la Ley 90-06, relativa a la reglamentación de los bancos, contempla principalmente el control que ejercen el Banco Central y la Comisión de Bancos en el marco de la supervisión del sistema bancario.

Se plantea el problema de la obligación que se impone a los establecimientos de crédito (bancos y sociedades financieras) de transmitir al Banco Central las informaciones y los documentos que se consideren útiles para examinar su situación.

En la redacción de este artículo lo que interesa es la inoponibilidad de la defensa del secreto bancario a los órganos de control de la actividad bancaria y a la justicia, en el caso de actuaciones penales.

Su redacción deja entrever la posibilidad de que las autoridades de fiscalización puedan ampliar la esfera de su investigación al funcionamiento de toda cuenta abierta en los libros de un establecimiento de crédito.

La Ley 90-06 no contiene disposiciones relativas a la congelación de las cuentas en las que presuntamente se hayan realizado operaciones sospechosas.

- **¿Existen disposiciones legales que autoricen a congelar o confiscar los fondos de personas físicas o jurídicas que no figuren en las listas preparadas por el BCEAO, el Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, pero que estén vinculadas con actividades terroristas?**
- **¿Se aplican a este tipo de cuestiones los artículos 87 bis y 372 del Código de Procedimiento Penal?**

La respuesta es afirmativa, pues dichas disposiciones son aplicables.

Se trata de disposiciones generales de derecho común del procedimiento en lo penal.

Apartado d)

El Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 665 a 669, se refiere a los crímenes y delitos cometidos en el extranjero, tanto por senegaleses como por extranjeros.

El artículo 665 reza como sigue: “El que en el territorio de la República sea cómplice de un crimen o delito cometido en el extranjero podrá ser enjuiciado y juzgado si el hecho está tipificado tanto por el derecho senegalés como por el derecho extranjero”.

Esta disposición enuncia el principio de la ausencia de armonía penal. Para que los actos cometidos en el extranjero se puedan enjuiciar en el Senegal tienen que ser simultáneamente pasibles de acción penal en el Senegal y en el país extranjero.

Según el artículo 45 del Código Penal, los cómplices de un crimen o delito serán castigados con las mismas penas que sus autores y coautores.

Las modalidades de complicidad están determinadas por el artículo 46 del Código Penal que, en su apartado 2, dispone como sigue: “Serán cómplices los que hubiesen procurado las armas, instrumentos u otros medios que se hubiesen utilizado para cometer el delito”.

El artículo 668 del Código de Procedimiento Penal dispone como sigue: “Una infracción se considera cometida en el territorio de la República cuando un acto que caracterice a uno de sus elementos constitutivos se haya cometido en el Senegal”.

Por esa razón, se puede enjuiciar a “quienes a sabiendas hayan ocultado, en todo o en parte, las cosas sustraídas o malversadas por conducto de un crimen o un delito” (artículo 430 del Código Penal).

El artículo 431 del Código Penal dispone que, “cuando los hechos encubiertos sean punibles, quien los encubra se hará pasible de la misma pena aplicable al crimen y a las circunstancias de éste”.

La ley distingue entre concurso real e ideal de delitos.

Existe un concurso ideal de delitos cuando los mismos hechos son susceptibles de varias calificaciones diferentes. En ese caso, la acción penal puede sustentarse en todas las calificaciones posibles. Sin embargo, la jurisdicción de enjuiciamiento se basará únicamente en la calificación que esté más en consonancia con los hechos.

En el concurso real de delitos hay delitos diferentes cometidos por una o más personas, cada uno de los cuales tiene su propia calificación.

En esta hipótesis, la acción penal se basa en el fundamento jurídico de cada infracción.

- **¿Tienen las instituciones financieras, otros intermediarios (como los abogados) y otras personas físicas o jurídicas la obligación de denunciar a las autoridades competentes las transacciones que consideren sospechosas? ¿En qué penas quedan incurso quienes omitan denunciar esas transacciones?**
- **¿Cuáles son las leyes, los arbitrios prácticos de control y las medidas de vigilancia con los que se puede velar por que los fondos y otros recursos recaudados con fines religiosos, benéficos o culturales no sean sustraídos a su objeto, en particular para financiar el terrorismo?**

La reglamentación bancaria y financiera actual no determina con precisión el control y las medidas de vigilancia de la malversación de los fondos y otros recursos recaudados con fines religiosos, benéficos o culturales.

Con todo, se ha de observar que el reglamento comunitario citado *supra* tiene en cuenta este aspecto a la espera de su introducción en el ámbito de aplicación de la ley sobre el blanqueo de capitales.

- **Sírvanse indicar las leyes y procedimientos que permitan reglamentar los sistemas no tradicionales de transferencia de fondos, en particular el sistema conocido con el nombre de “Lawala” y sistemas similares.**

Los sistemas no tradicionales de transferencia de fondos, más conocidos con el nombre de “sistemas informales”, no son objeto de una reglamentación específica.

Sólo los sistemas tradicionales son objeto de la reglamentación contenida en el **Reglamento R 09/98/CM/UEMOA, de 20 de diciembre de 1998**, aplicable a las relaciones financieras exteriores de los Estados miembros de la UEMOA.

El artículo 2 del Reglamento menciona a los intermediarios encargados de ejecutar operaciones financieras con el extranjero.

De conformidad con este artículo, “las operaciones de cambio, los movimientos de capital y los pagos de toda índole entre un Estado miembro de la UEMOA y el extranjero y, dentro de la UEMOA, entre un residente y un no residente sólo podrán ejecutarse por conducto del **Banco Central, la Administración de Correos o un banco intermediario autorizado para el cambio de moneda extranjera**, en el marco de sus competencias respectivas definidas en el anexo de dicho Reglamento.

En consecuencia, los regímenes de transferencia que no estén amparados por este Reglamento son ilícitos, infringen la reglamentación cambiaria y sus autores son pasibles de enjuiciamiento.

En la Ordenanza No. 94-29, de 28 de febrero de 1994, relativa al enjuiciamiento de infracciones de control de cambios, ratificada por Ley No. 94-54, de 27 de mayo de 1994, se define la naturaleza de las infracciones de control de cambios, se establece el procedimiento de constatación de las infracciones y se determinan las penas.

Párrafo 2

Apartado a)

- **¿Pueden las disposiciones del Código Penal servir de fundamento jurídico para enjuiciar las actividades de reclutamiento de miembros de grupos terroristas, en particular cuando esos grupos realizan actividades fuera del territorio senegalés?**

Según el artículo 238 del Código Penal, “será sancionada penalmente la asociación constituida, sea cual fuese su duración o el número de sus miembros, o la conspiración formada con el fin de preparar uno o varios delitos contra las personas o los bienes”.

Según el apartado 1 del artículo 239 del Código Penal, “se sancionará penalmente a toda persona afiliada a una asociación constituida o que haya intervenido en una conspiración formada con el fin de preparar o de cometer uno o varios crímenes contra las personas o los bienes”.

El artículo 240 del mismo Código dispone que “se sancionará penalmente a quien, a sabiendas y voluntariamente, haya cooperado con los autores del delito de asociación delictiva proporcionándoles los instrumentos del delito, los medios de correspondencia o los lugares de reunión”.

La represión de las **actividades delictivas de reclutamiento y recaudación de fondos** corre de cuenta de los servicios de los Ministerios de las Fuerzas Armadas, de Finanzas y del Interior, encargados de la seguridad interior y exterior, los servicios de inteligencia y la vigilancia de las operaciones financieras.

- **Aclaraciones sobre los aspectos principales de las disposiciones de la Ley 66-03, de 18 de enero de 1966, y del Decreto 66-889**

La Ley 66-03, de 18 de enero de 1966, relativa al régimen general de las armas, clasifica las armas en siete categorías, a saber: armas de guerra, defensa, caza, tiro y deporte, armas blancas y armas de avancarga y de colección. La Ley prohíbe estrictamente la fabricación, importación, exportación, cesión, compraventa, almacenamiento y portación de armas de guerra y de defensa, que están destinadas especialmente a las fuerzas del orden. Respecto de las categorías segunda, tercera, cuarta y quinta (art. 13), se introduce un matiz en cuanto a que una parte de las actividades contempladas sólo se puede realizar con autorización de la administración y bajo control.

Está prohibida la fabricación de armas por particulares por su propia cuenta.

Los responsables de estos hechos se castigan con penas de reclusión y multa.

Las disposiciones de la Ley autorizan la confiscación de armas fabricadas, importadas o portadas sin autorización.

Incluso respecto de las armas y municiones destinadas a las fuerzas de seguridad, la Ley precisa que se han de importar al amparo de un contingente determinado anualmente (art. 15).

A fin de limitar los delitos cometidos con armas, la Ley prohíbe que éstas sean portadas fuera del domicilio del tenedor (art. 18), salvo en los casos autorizados por decreto.

Cabe mencionar que el poder ejecutivo, en cualquier momento, en función de las circunstancias, puede invalidar todas las autorizaciones que haya otorgado para la importación, el almacenamiento y la portación de armas de las categorías para las que esas autorizaciones estén permitidas.

Esta ley sobre el régimen general de las armas ha instituido un sistema que propicia que los servicios de seguridad ejerzan una gran vigilancia de los tenedores de armas en situación irregular y de los traficantes, con la mira de reprimir esos actos.

La ley establece las condiciones a las que deben conformarse los importadores autorizados, las restricciones impuestas en cuanto a los lugares de depósito de armas y otras formalidades exigidas por la administración (renovación de existencias y teneduría de registros).

Además, este decreto reglamenta la expedición de los permisos de importación y compra de armas, así como la periodicidad de su renovación.

En materia de armas y municiones, el particularismo del Senegal, como muchos otros países africanos, radica en que carece de una industria de armamentos, lo que contribuye a limitar la circulación de armas de guerra.

Es cierto que, debido al conflicto que persiste en la región sur de Casamance, hay un tráfico que alimenta la rebelión del MFDC. Sin embargo, el Senegal hace todo lo posible por poner fin al conflicto.

• **Medidas prácticas adoptadas para aplicar la moratoria de la CEDEAO respecto del tráfico ilícito de armas ligeras**

Renovada en octubre de 2001 por un nuevo plazo de tres años, la moratoria de la CEDEAO sobre el tráfico ilícito de armas ligeras prohíbe a los países signatarios, entre ellos el Senegal, la importación, exportación y fabricación de armas ligeras, salvo caso excepcional. Asimismo, prescribe el establecimiento de “Comisiones Nacionales” a fin de fomentar y asegurar la coordinación de medidas concretas para dar efecto a la moratoria en el plano nacional.

En aplicación de esas recomendaciones, el Senegal creó, en abril de 2002, una Comisión Nacional sobre Armas Ligeras dependiente del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que supervisa juntamente con el Ministerio del Interior, el tráfico de armas en el interior del país o en las fronteras nacionales.

Asimismo, el Estado ha dado amplia difusión a las nuevas medidas y procedimientos de importación de armas establecidos por la CEDEAO. En consecuencia, la fabricación o importación de armas (por parte de los Estados o de los particulares) debe ser objeto de autorización de la Secretaría Ejecutiva de la CEDEAO, que solicita previamente el asesoramiento de los Estados miembros. Cuando uno o más Estados miembros se oponen, el solicitante puede recurrir a la dependencia de arbitraje de la Secretaría Ejecutiva.

En el año 2000, el Senegal presentó una solicitud de importación de armas con destino a la Gendarmería Nacional, que fue objeto de oposición por parte de un país miembro.

Asimismo, las solicitudes de ciertos armeros del país han corrido igual suerte el año pasado.

A la luz de lo antes expuesto, cabe precisar que, además de la moratoria de la CEDEAO, el Senegal, por Ley 66-03, de 18 de enero de 1966, reglamenta estrictamente la posesión, portación e importación de armas en el territorio nacional.

Apartado b)

- **Mecanismo de coordinación entre las dependencias senegalesas que velan por la fiscalización de los estupefacientes, las investigaciones y la seguridad financiera y, en particular, los controles en frontera para poner trabas a la circulación de terroristas.**
- **Mecanismo de alerta rápida del Senegal en caso de sospecha de una actividad terrorista.**

Ante el fenómeno del tráfico de estupefacientes, el Senegal ha establecido las estructuras administrativas necesarias no sólo para luchar contra el tráfico de estupefacientes, sino también para coordinar la acción de los servicios competentes. En 1965 se estableció una Comisión Nacional de Estupefacientes. La Comisión fue reorganizada por el **Decreto 87-415**, de **3 de abril de 1987**, con el mandato de definir la política nacional y coordinar la acción oficial de lucha contra la droga.

La Comisión Nacional de Estupefacientes fue sustituida en 1997 por un Comité Interministerial de Lucha contra las Drogas, creado por el **Decreto No. 97-1217**, de 17 de diciembre de 1997. El Comité, presidido por el Ministerio del Interior, está integrado por representantes de 17 ministerios, entre los cuales se cuentan los Ministerios de las Fuerzas Armadas, Justicia, Asuntos Exteriores, Finanzas y Educación Nacional.

La secretaría del Comité está presidida por un coordinador nacional. Además de los ministerios, colaboran con el Comité los representantes de seis organizaciones no gubernamentales que dedican su actividad a la lucha contra la droga.

El cometido principal del Comité es:

- **Definir la política nacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas;**
- **Proponer medidas encaminadas a mejorar los medios de que disponen los distintos servicios que intervienen en la lucha contra las drogas;**
- **Fomentar la información, la prevención, el tratamiento médico-social, la investigación, los estudios epidemiológicos y las estadísticas en relación con el uso indebido de drogas;**
- **Coordinar las medidas de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la prevención y el control del uso indebido de drogas.**

Por último, el Comité debe presentar un informe anual al Gobierno y a los organismos internacionales interesados sobre la situación nacional en materia de toxicomanía, la evolución relativa al control del suministro y la reducción de la demanda y, al propio tiempo, formular propuestas para fomentar las distintas medidas adoptadas contra el flagelo.

El servicio que interviene directamente en esta actividad de lucha contra las drogas es la **Oficina Central de Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes (OCTRIS)**. En un principio, la Oficina Central se estableció por **Resolución**

Interministerial No. 5671, de 10 de julio de 1991. El **Decreto No. 976-1218**, de 17 de diciembre de 1997, estableció sus normas de organización y funcionamiento.

Las principales atribuciones de la Oficina Central son las siguientes:

- Centralizar todas las informaciones que puedan llevar a la detención de traficantes;
- Coordinar y promover todas las medidas tendientes a la represión del tráfico ilícito;
- Intervenir en el plano nacional y coordinar la acción de los servicios regionales de policía competentes.

La OCRTIS, en el curso de sus actividades, se comunica con el Comité Interministerial de Lucha contra las Drogas, los demás organismos gubernamentales que intervienen en esa actividad, la Policía Judicial, la Aduana y los servicios del Ministerio de Salud.

En lo que se refiere a los toxicómanos, el Senegal aprobó el **Decreto No. 97-1219**, de 17 de diciembre de 1997, en el cual se establecen las medidas relativas al tratamiento de la toxicomanía.

En el plano internacional, las dependencias senegalesas que intervienen en la lucha contra las drogas colaboran con el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Dinero (**GIABA**) en el contexto subregional de la **CEDEAO**.

Estas estructuras, además, están en contacto permanente con la Representación Regional del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (**PNUFID**), con sede en Dakar.

El mecanismo de alerta rápida en el África entre los servicios de inteligencia internacionales se encuentra todavía en estado embrionario.

Aparte de la Convención de Argel de 1999, los Estados africanos no disponen de un régimen jurídico para enmarcar su lucha contra el terrorismo.

Ahora bien, a raíz de los atentados antiamericanos de Nairobi y Dar es Salam y, sobre todo, los de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, se echó de ver claramente no sólo que la Convención de Argel no había entrado todavía en vigor, sino que sus disposiciones no eran suficientes ni estaban tampoco adaptadas a las nuevas exigencias de una eficaz lucha antiterrorista en el plano mundial.

Por esa razón, el Jefe de Estado del Senegal, el Presidente Abdoulaye Wade, tomó la iniciativa de movilizar al África, con ocasión de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y de convocar una Cumbre africana de urgencia para adoptar las medidas necesarias en África en la lucha antiterrorista a escala mundial.

El proyecto de pacto africano propuesto por el Senegal en esa oportunidad fue sustituido por la Declaración de Dakar, que insta a adoptar un plan de acción continental y, sobre todo, a elaborar un protocolo adicional a la Convención de Argel, teniendo en cuenta los nuevos desafíos y exigencias operacionales del momento, para prevenir y reprimir más eficazmente el terrorismo en todas sus formas.

En ese contexto, la Unión Africana (UA) celebró en Argel, del 11 al 14 de septiembre de 2002, una reunión intergubernamental de alto nivel que aprobó un proyecto de plan de acción que se presentará para su aprobación a la próxima

Cumbre ordinaria de la UA, que se celebrará en Maputo, e instó a la Comisión de la UA a que profundizara su reflexión sobre los elementos que habían de formar parte del Protocolo Adicional, incluidas, además del mecanismo de seguimiento, otras disposiciones encaminadas a completar y actualizar la Convención de Argel. Se sugiere, a ese respecto, que se soliciten propuestas a los Estados miembros de la UA y que se presente el proyecto exhaustivo de protocolo a los órganos deliberantes de la UA lo antes posible, con miras a que lo examine la próxima Cumbre de la Unión en Maputo (Mozambique).

Sin embargo, África carece todavía de un sistema eficaz de coordinación, a pesar de que la flamante UA ha previsto un mecanismo de esa índole por conducto de su Consejo de Seguridad y de Paz.

Entre tanto, cada Estado se vale de sus propias informaciones y utiliza también las informaciones disponibles de Interpol, a más de adoptar las leyes pertinentes. En caso de amenaza terrorista inmediata, cada Estado recurre a sus propios servicios competentes.

El Senegal, desde ese punto de vista, ha reformado la legislación interna a fin de reprimir el terrorismo. Ha establecido, también, una dependencia de lucha contra el terrorismo, que bien se podría reforzar.

Por último, el Senegal colabora con los países limítrofes en la lucha contra el bandidismo y la delincuencia organizada transnacional.

Apartado c)

• Legislación sobre la entrada y residencia de extranjeros en el Senegal

El Decreto No. 71.860, de 28 de julio de 1971, rige las condiciones de entrada, residencia y radicación de extranjeros.

En su **Título I**, el decreto define los documentos de identidad que se han de presentar para poder entrar en el territorio nacional, a saber, el pasaporte o documento de viaje y el visado de entrada salvo que haya dispensa (los países de la UE y de la CEDEAO, los Estados Unidos de América y el Canadá). Sin embargo, las tripulaciones de los aviones que hacen escala pueden entrar en territorio nacional si presentan su cartilla de identidad, licencia o certificado de tripulante.

El **Título II** dispone sobre las condiciones de residencia y radicación de extranjeros que requieren formalidades de visado con indicación del plazo o la autorización de residencia de autorizarse la radicación. Este visado tiene validez por un año a contar de la fecha de su expedición.

El otorgamiento de visado a ciertos extranjeros requiere el previo dictamen del Ministerio del Interior, que debe ser informado del otorgamiento de visados con autorización de residencia.

El **Título III** se refiere a las condiciones de salida del territorio de los extranjeros que deben presentar al Servicio de Control en Frontera los siguientes documentos de viaje, a saber: pasaporte, un documento de viaje o un título similar válido y los certificados internacionales de vacunación exigidos por los reglamentos sanitarios. Los titulares de una cartilla de identidad de extranjero y los hijos de inmigrantes menores de 15 años que viajen solos deben obtener un visado del Ministerio del Interior.

El **Capítulo II** está consagrado a la devolución de los extranjeros que no reúnan las condiciones exigidas para la entrada en el Senegal. Trata asimismo de la expulsión por resolución del Ministerio de todo extranjero que haya infringido la reglamentación en vigor en la materia.

Las disposiciones generales del texto autorizan el enjuiciamiento de los extranjeros cuya conducta sea contraria al orden público o a la seguridad del Estado.

Apartado d)

- **Aplicación de la Convención de la OUA sobre el terrorismo y de la Declaración de Dakar**

En la Declaración de Dakar de 2001 se invitó a todos los Estados de la OUA que no hubiesen ratificado la Convención de Argel sobre la lucha contra el terrorismo, de 14 de julio de 1999, a que procediesen a ratificarla.

Por su parte, el Senegal ratificó la Convención de Argel el 20 de diciembre de 2001.

Además, el Presidente Abdoulaye Wade dispuso que se constituyera un Grupo de Trabajo compuesto de expertos para elaborar los textos relativos a la lucha contra los actos de terrorismo, la financiación del terrorismo, la tipificación de esos actos como delitos y la competencia universal de la jurisdicción senegalesa. Ese Grupo de Trabajo, que ya se ha constituido estudia ahora la posibilidad de modificar el régimen jurídico e institucional del Senegal por lo menos en tres esferas, a saber:

- La tipificación y castigo de los actos de terrorismo;
- La aplicación a esos crímenes de normas especiales de procedimiento en lo penal (por ejemplo, prolongación del plazo de detención); y
- El establecimiento, en caso necesario, de un nuevo tribunal en la materia.

Apartado e)

- **¿De qué manera la represión de las infracciones mencionadas en el informe relacionado con el presente apartado se conforma a las disposiciones de la resolución en un contexto transnacional, en particular cuando los actos se realizan en el Senegal sin ser necesariamente de naturaleza criminal o gravemente criminal?**

- Se ruega remitirse al punto sobre el Grupo de Trabajo mencionado *supra* (párr. 2 d)) que está encargado de examinar la legislación que se ha de elaborar con esa finalidad. **Competencia de los tribunales senegaleses para conocer en los actos delictivos en los siguientes casos:**

- El senegalés que haya cometido fuera del territorio de la República un acto criminal o delictivo tipificado por la ley del Senegal puede ser enjuiciado por la administración de justicia senegalesa;
- En el caso de una persona que reside habitualmente en el Senegal, los artículos 35 y 43 del Código de Procedimiento Penal atribuyen competencia a la jurisdicción senegalesa toda vez que se sospeche que ha participado en la comisión de un delito;

- En el caso de un acto cometido fuera del Senegal por un extranjero que se encuentre actualmente en el Senegal, corresponde remitirse a la respuesta indicada *supra* (párrafo 1 d)).

Apartado f)

• Acuerdos bilaterales y multilaterales de asistencia mutua en materia penal en los que es parte el Senegal

Acuerdos bilaterales

1. Convención judicial con Túnez, de 13 de abril de 1964, ratificada por el Senegal el 20 de enero de 1965.
2. Convención con Gambia, de 28 de abril de 1965, ratificada por el Senegal el 26 de junio de 1974.
3. Convención con Malí, de 8 de abril de 1965, ratificada por el Senegal el 18 de enero de 1966.
4. Convención con Marruecos, de 3 de julio de 1967, ratificada por el Senegal el 14 de junio de 1968.
5. Convención con Francia, de 29 de marzo de 1974, ratificada por el Senegal el 8 de enero de 1975.
6. Convención con Guinea-Bissau, de 8 de enero de 1975, ratificada por el Senegal el 6 de julio de 1978.
7. Convención con Cabo Verde, de 17 de abril de 1980, ratificada por el Senegal el 23 de julio de 1982.

Tratados multilaterales

1. Convención de la CEDEAO sobre extradición, de 6 de agosto de 1994, ratificada por el Senegal el 16 de mayo de 1995.
2. Convención de asistencia judicial mutua en materia penal entre los Estados miembros de la CEDEAO, de 29 de julio de 1992, ratificada por el Senegal el 30 de abril de 1999.
3. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, ratificado por el Senegal el 30 de abril de 1999.
4. Convención relativa a la cooperación en materia judicial entre los Estados partes en el Acuerdo de no agresión y defensa (ANAD), firmada el 21 de abril de 1987 en Nouakchott, ratificada por el Senegal el 28 de diciembre de 1987.
5. Convención general de cooperación en materia judicial de la antigua Organización Común Africana y Malgache (OCAM), de 12 de septiembre de 1961.

• Plazo para solicitar la asistencia judicial

La legislación no establece un plazo preciso en materia de asistencia judicial mutua. Habida cuenta de la naturaleza del asunto, el Senegal puede invitar a las autoridades judiciales competentes a cumplir los actos solicitados en un plazo compatible con la naturaleza del asunto.

La regla general es que el Senegal, en el marco de la asistencia judicial, adopta todas las medidas necesarias para cumplir los actos solicitados en la rogatoria.

Apartado g)

- **Medios de coordinación entre las dependencias responsables por la fiscalización de estupefacientes, la represión de la delincuencia financiera y la seguridad financiera, en particular los controles en frontera**

Cabe remitirse al apartado b) de este párrafo.

Párrafo 3

Apartados a), b) y c)

- **La extradición en el Senegal** se rige por la Ley No. 71-77, de 29 de diciembre de 1971.

- **Fundamento jurídico de la extradición**

- El artículo 1 de la Ley mencionada *supra* dispone que, en ausencia de tratados, las condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradición se determinarán por las disposiciones de la Ley que se aplique igualmente a los aspectos que no hubiesen sido expresamente regulados por dichos tratados.

Conviene precisar que si el tratado ratificado por el Senegal incluye disposiciones de efecto inmediato en el derecho interno, estas disposiciones se aplican inmediatamente.

El poder legislativo interviene cuando las disposiciones del tratado requieren la sanción de legislación interna (por ejemplo, para determinar la sanción penal).

- **El Senegal, en cuanto a la extradición, no aplica el principio de la lista cerrada para determinar las infracciones que pueden ser objeto de extradición.** La Ley No. 71-77, de 29 de diciembre de 1971, sobre extradición dispone, en su artículo 4, que los actos que pueden dar lugar a extradición, ya se trate de solicitarla o de acordarla, son los siguientes: “Todos los actos castigados con sanciones penales o correccionales, con la salvedad de que la sanción correccional ha de ser igual o superior a dos años. No se concederá la extradición cuando el crimen o delito tenga carácter político, cuando la infracción cometida fuera del Senegal haya sido enjuiciada y juzgada definitivamente y cuando la acción pública hubiese prescrito antes del requerimiento”.

Apartados d) y e)

- **Progresos realizados por el Senegal en cuanto a las convenciones y protocolos internacionales relativos al terrorismo**

a) Convenciones ratificadas por el Senegal

Convenciones de las Naciones Unidas

1. Convenio de Tokio de 1963 relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, ratificado por el Senegal el 28 de febrero de 1972.

2. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 18 de diciembre de 1970, que entró en vigor el 14 de diciembre de 1971 y fue ratificado por el Senegal el 14 de febrero de 1973.
3. Convenio de Montreal de 1971 para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, y su Protocolo de 1984, ratificado por el Senegal el 5 de enero de 1973.
4. Convención internacional de 1979 contra la toma de rehenes, aprobada en Nueva York y ratificada por el Senegal el 10 de marzo de 1987.
5. Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, de 4 de diciembre de 1989, ratificada por el Senegal el 3 de abril de 1999.

Convenciones de la OUA

1. Convención de la OUA relativa a la prevención y lucha contra el terrorismo, aprobada en Argel el 14 de julio de 1999, ratificada por el Senegal el 20 de diciembre de 2001.
2. Convención de la OUA sobre la eliminación de los mercenarios en África, firmada por el Senegal el 8 de febrero de 1978 en Addis Abeba y ratificada el 2 de julio de 1981.

b) Convenciones de las Naciones Unidas relativas al terrorismo que el Senegal está en curso de ratificar

1. Convención de Nueva York de 1973 sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos.
2. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988).
3. Protocolo contra la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
4. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (Montreal, 1988).
5. Convenio de 1997 sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección.
6. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 1997).
7. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 1999).
8. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales de diciembre de 2000.
9. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 26 de octubre de 1979.

- **¿Es suficiente la primacía de los tratados internacionales sobre el derecho interno para obviar la necesidad, en el caso del Senegal, de sancionar una legislación que dé efecto en el plano nacional a las obligaciones que tiene asumidas en virtud de instrumentos internacionales?**

La respuesta es negativa. A título de ejemplo cabe mencionar el artículo 1 de la Ley No. 71-77, de 28 de diciembre de 1971 que reza como sigue: “En ausencia de tratados, las condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradición se determinarán por las disposiciones de la Ley que se apliquen igualmente a los aspectos que no hubiesen sido expresamente regulados por dichos tratados”.

- **¿Son extraditables, en virtud de los tratados bilaterales en los cuales es parte el Senegal, las infracciones previstas por los convenios y protocolos internacionales pertinentes?**

Es innecesario contemplar específicamente esas infracciones porque el derecho común de la extradición se rige por los tratados mismos que el Senegal aplica si los ha ratificado o, en su defecto, por la Ley nacional No. 71-77, de 28 de diciembre de 1971, relativa a la extradición.

Apartado g): ¿Es posible en derecho senegalés que se denieguen por razones políticas los requerimientos de extradición de presuntos terroristas?

La respuesta figura *supra* (apartados a), b) y c) del párrafo 3).

Párrafo 4

Respecto de las preocupaciones señaladas en el párrafo 4 de la resolución 1373 (2001) del Consejo, cabe mencionar que el Senegal tiene sus propias preocupaciones. Por esa razón, desde hace un decenio, se ha asociado la coordinación de las actividades realizadas en los planos nacional, subregional, africano e internacional.

Por ejemplo, en el plano nacional, el Senegal, cabe recordar, fue el primer país de la subregión del África occidental que tipificó el blanqueo de capitales provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes e instituyó mecanismos de colaboración entre los poderes públicos, los agentes económicos y el mundo financiero y bancario a fin de combatir eficazmente ese flagelo.

A ese respecto los poderes públicos se preparan para incorporar el proyecto de Ley comunitaria sobre el blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico nacional.

En el plano subregional, habida cuenta de su experiencia nacional de represión del blanqueo de capitales, que tropezó con el obstáculo del secreto bancario instituido por el Tratado de la UEMOA, el Senegal ha tomado la iniciativa de establecer una estructura subregional de represión del blanqueo de capitales en el seno de la CEDEAO, que ha dado nacimiento al GIABA, que coordina las actividades de aplicación.

En el plano internacional, el Senegal, en el mismo orden de ideas, ha desempeñado una importante función en la elaboración y aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo (Italia), el 13 de diciembre de 2000, tras haber participado en los 12 períodos de sesiones del Comité Especial establecido a ese efecto por la Asamblea General.

Por último, nuestro país no pierde ocasión alguna de alentar a los demás Estados del continente africano a hacer lo propio, en lo que concierne a la ratificación de dicha Convención.
